

ANEXO I

RESOLUCIONES DESTACADAS

- 1- Resolución N° 01/09 DPRN de fecha 5 de febrero de 2.009; sobre fragilidad del Sistema Eléctrico Provincial.
- 2.- Resolución N° 37/09 de fecha 19 de Marzo de 2009, Recomendación al Gobernador por conflicto docente.
- 3- Resolución N° 46/09 DPRN de fecha 13 de abril de 2.009; sobre incumplimiento deber colaboración del Ministerio de Salud Pública Provincial.
- 4- Resolución N° 48/09 DPRN de fecha 14 de mayo 2.009; sobre Recomendación al Gobernador, pide derogación del Decreto 80/09 sobre tope salarial.
- 5- Resolución N° 49/09 DPRN de fecha 15 de mayo de 2.009; sobre Recomendación al Gobernador, pide reglamentación del seguro de vida para mayores de 80 años.-
- 6- Resolución N° 54/09 DPRN de fecha 01 de octubre de 2.009; remite actuaciones a la Fiscalía de Investig. Administrativas (S/ Situación del CEM 50 de General Conesa).
- 7- Resolución N° 55/09 DPRN de fecha 16 de octubre de 2.009; sobre recomendación al Ministro de Familia para que intervenga en conflicto con trabajadores de Promoción Familiar de General Roca.

PRESENTACIONES JUDICIALES

1.- AMPARO GAS

CAUTELAR "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ PIEZA SEP. CON MOTIVO DE LA APELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR" Expte. 569/1/09. En trámite ante el Juzgado Federal de la Ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de Luciano Campagnoli

Autos "PICCININI Ana Ida c/ ESTADO NACIONAL y OTROS S/ Acción de Amparo" Expte. 533 Folio 243 año 2009 Juzgado Federal de General Roca

Autos EN CÁMARA "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RİO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE APELACIÓN" Expte. N° C13409 Camara de Grl. Roca

Autos "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PEN) Y OTROS S/ AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR" Expte. N° C14609 (BARILOCHE)

2.- AMPARO NAFTAS

2.a. "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO s/AMPARO COLECTIVO LEY 2779" Expte.N° 22167/07 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. Secretaría: Asuntos originarios Dr. Ezequiel Lozada

2.b. "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO S/ AMPARO COLECTIVO LEY 2779" Expte. 492/2008 Tomo 44, letra D Tipo RHE. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SECRETARIA JUDICIAL NRO. 4

3.- DENUNCIAS PENALES.-

"OTERO, GUSTAVO S/ AMENAZAS" (Expte. N° 42862/09) en trámite por ante el Juzgado de Instrucción N° 2.

"PICCININI ANA C/ SARTOR DANIEL Y OTRO S/ AMENAZA SIMPLE" (Expte. N° C1F - 3522-09). En trámite por ante la Fiscalía N° Uno de Viedma del Dr. Ricardo Falca (investigación preliminar).

"DANIEL SARTOR S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" Expte. 42231/09. en trámite por ante el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 2 DE VIEDMA..

Autos "DEFENSORÍA DEL PUEBLO C/ DANIEL SARTOR S/INCUMPLIM. DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO". Expte. C1F 4884/09

"CARDOSO, CARLOS ABEL S/ DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA". Expte. Judicial N° S3-08-210. En trámite por ante el Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo del Dr. Martín Losada, Secretaría N° 3, con asiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Fiscal de Grado Dr. Marcos Burgos.

Denuncia Penal C/ Carlos Sansuerro por venta irregular de lotes. Tramita en Juzgado de Villa Regina.

Denuncia por irregularidades en proced esterilización de material quirúrgico (incluidos descartables) contra Empresa CENEC y Min. Salud. Autos "PICCININI, ANA IDA S/DENUNCIA" Expte. 42986 año 2009 en tramite por ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad de Viedma.

Promueve investigación en Fiscalías de turno de Viedma y Gral. Roca, respectivamente, para que se investigue el fallecimiento de un niño en el Hospital de SAO y otros dos pacientes en Hospital de Gral. Roca.

AUTOS "DRA. PICCININI ANA S/ DENUNCIA" (Causa FLAVORS & CIA S.A.) EXPTE. NRO. 730/08 JUZGADO DE 1º INSTANCIA NRO. 4 DE LA 1RA. CIRC. JUDICIAL

APELACIÓN QUERELLANTE PARTICULAR DEFENSORÍA

Autos "DRA. PICCININI ANA S/ DENUNCIA S/ INCIDENTE DE APELACIÓN"
Expte. 256/145/09 CÁMARA CRIMINAL SALA B DE LA 1RA. CIRC. JUDICIAL

4.- QUERELLAS POR CALUMNIAS E INJURIAS.

Contra el Jefe de la Policía, Crio Víctor Cufré y contra el Sec. Gral. Del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Sansuerro. En trámite por ante el Juzgado Correccional N° 6 de Viedma

5.- DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

(CONTRA RESOLUCION DE ARCHIVO DEL FISCAL PABLO BERRAZ – CAUSA INCREMENTO DESPROPORCIONADO DEL LEGISLADOR SARTOR)
Autos "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO C/ PCIA. DE RÍO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expte. 0021/2009 – CAV CÁMARA DE APELACIONES DE VIEDMA.

SOLICITUD DE ALLANAMIENTO A LA FISCALÍA DE INV. ADMINISTRATIVAS
Autos "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACIÓN TÉRMINOS ARTICULO 11 LEY 2756" Expte. Nro. S7-09-1186. TRAMITE EN JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL N° 4 SECRETARIA 7

"DRA. ANA IDA PICCININI EN AUTOS "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACIÓN TÉRMINOS ARTICULO 11 LEY 2756" S/ RECURSO DE QUEJA" Expte. Nro. 258147/09 CÁMARA CRIMINAL SALA A.

TEXTOS RESOLUCIONES MAS DESTACADAS

1 - RESOLUCIÓN Nº 01/09 “DPRN”

VIEDMA, 05 febrero de 2009.-

VISTO el expediente Nº 43/09 “DPRN” del registro de la Defensoría del Pueblo, y

CONSIDERANDO:

I

Que habiendo tomado estado público la fragilidad del sistema eléctrico Provincial, por parte que quién fuera titular de su máximo órgano de control (EPRE) durante los años 1996 – 2003 Sr. Enrique Oheren’s, quién pone de resalto la falta de inversiones imperiosas en el sistema. “Tanto la línea entre Villa Regina y el Valle Medio como la que permitiría aportar la energía de Casa de Piedra al Alto Valle obras que darían mayor potencia y confiabilidad al sistema de transporte de una región que viene creciendo en forma sostenida en el orden de un 7% anual” (Río Negro 02/02/2008).-

Destaca que el argumento histórico ha sido “que la provincia no cuenta con los recursos para financiarla” circunstancia que luego afirma “no es posible sostenerlo cuando hay mecanismos de financiamiento que se pueden utilizar, que los funcionarios y las máximas autoridades conocen muy bien”.-

Que respecto de la problemática no puede ser ajena la ya trillada necesidad de la construcción de la Segunda Línea de abastecimiento, sea desde el anillo patagónico o en paralelo a la existente (Alicurá - Bariloche), sabemos de la existencia de un trámite licitatorio que opta por esta segunda opción, pero pasan los años y no se concreta la obra.-

Por último destaco la hoy postergada obra que uniría a la ciudad de El Bolsón con la localidad de Esquel, que abandonada la traza inicial, luego de tres años, aún es una incógnita.

II

Lo expuesto ha sido puesto de resalto en reiteradas oportunidades por esta Defensora del Pueblo, particularmente con motivo de la Audiencia Pública de la Segunda Revisión Tarifaria Quinquenal de la Distribuidora para el período 2006- 2011; ocurrida en el año 2007 donde destacamos:

“No quiero cerrar mi exposición, sin manifestarme sinceramente en pro de la revisión URGENTE del sistema y/o marco regulatorio, modelo predispuesto por autoridades nacionales en un contexto absolutamente ajeno al actual y que hoy por hoy no se adecua a la realidad de la provincia.-

Así el mecanismo de seguimiento que pretende el EPRE y que se caracteriza por el control “ex post” de las contingencias y/o vicisitudes de la empresa, para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones, surge a mi modesto entender a todas luces INSUFICIENTE.-

No dudo de la predisposición del regulador en lograr el objetivo, pero si dudo de la distribuidora y/o sus escalonados controlantes, de que su intención sea permanecer por los años que se le otorga la concesión, hoy 80.-

Así, en solo quince años de gestión tenemos una sociedad en virtual estado de quiebra, cuyos controlantes se domicilian en Luxemburgo y con varios juicios a costas, que no vale ya la pena enumerar.-

Ante ello, no sería descabellado pensar que los accionistas de EDERSA pretendan el mayor lucro posible, mediante las menores inversiones necesarias, y “aguantar el servicio” mientras se pueda, hasta llegar a una crisis, que nos encontrará mirando estadísticas crecientes.-

Debo y es mi deber como ciudadana y Defensora del Pueblo, destacar, que SE DEBEN EXTREMAR los mecanismos de control sobre la Distribuidora, teniendo un cabal conocimiento de cada inversión, mantenimiento, contrato de empleo o rescisión que realiza la misma; de lo contrario, caeríamos en un riesgo mayor respecto de un servicio público esencial Y EXTRATEGICO de carácter continuo y básico para la economía provincial; que no puede dejarse completamente en manos de privados.

Entiendo IMPERIOSO que el EPRE comprenda que su rol como controlador trasciende la tarea de estadista respecto de contingencias, sino que también debe indagar e informar a los usuarios sobre la sustentabilidad del sistema de distribución de electricidad de la Provincia basado en consideraciones de orden físico, necesitamos conocer en que estado se encuentra la infraestructura de distribución en tanto compromete la salud, la seguridad y el bienestar de la población, así como el normal desenvolvimiento de la actividad económica.

De lo contrario conceptos tales como, “red adaptada a la demanda”, “operación eficiente y prudente”, etc., sólo cobran sentido en los modelos de simulación de redes pero no en la realidad.

Así expresaba el Defensor del Usuario sobre esta situación “debo informar que no he podido contar con un diagnóstico aunque más no sea expeditivo sobre el estado actual del sistema. De la información contable surge que la empresa ha realizado inversiones entre el año 2002 y 2006 por un monto de alrededor de 37 millones de pesos y en su presentación promete invertir otros 20 millones durante el próximo quinquenio. Sin embargo desconocemos en que grado se corresponden o se corresponderán con un sistema eficiente de distribución, o dicho de otro modo y más allá de la discusión tarifaria, si fueron o serán los niveles adecuados que se requieren para garantizar el servicio?”

“En mi opinión el Estado no puede delegar su responsabilidad en la prestación del servicio y descansar exclusivamente sobre los incentivos económicos para garantizar el desempeño de las empresas actantes. Muy por el contrario, deben extremarse las medidas preventivas para evitar que ocurran hechos que pongan en riesgo la continuidad del servicio de distribución”

III

En dicho marco entiendo corresponde iniciar actuaciones preventivas DE OFICIO (artículo 9º, 11º y concordantes de la Ley 2756) a los efectos de evacuar las dudas planteadas.

Por ello,

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

ARTICULO 1º: Avocarme preventivamente a la cuestión conforme a los arts. 9º y 11º de la Ley N° 2756.-

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, informe: 1) Montos anuales recibidos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que integran el Fondo Provincial de Infraestructura Eléctrica, creado por el Artículo 59º, inc. b), de la Ley N° 2902. Concretamente se solicitan los montos anuales percibidos los años 2004; 2005; 2006; 2007 y 2008. 2) Detalle del destino que se ha dado a la utilización de estos recursos, citando denominación de la obra; monto total de la misma; número de expediente y copia de la rendición efectuada al Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Lo solicitado corresponde a los ejercicios 2004; 2005; 2006; 2007 y 2008. 3) Asimismo informe si el EPRE tuvo alguna intervención técnica en la selección de la obra y posteriormente una vez realizada.

ARTÍCULO 3º: Solicitar al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.), informe: 1) Montos anuales recibidos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que integran el Fondo Provincial de Subsidios Tarifarios, creado por el Artículo 59º, inc. a) de la Ley N° 2902. Concretamente se solicitan los montos anuales percibidos los años 2004; 2005; 2006; 2007 y 2008. 2) Detalle del destino que se ha dado a la utilización de estos recursos, citando beneficiarios; monto total mensual y anual de cada subsidio; número de expediente y copia de la rendición efectuada al Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Lo solicitado corresponde a los ejercicios 2004; 2005; 2006; 2007 y 2008.

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, cumplido, ARCHIVESE.

2.- RESOLUCIÓN N° 37/09 “DPRN”

VIEDMA, 19 de Marzo de 2009.

VISTO: El expte. administrativo N° 259/09 “DPRN” caratulado “S/ solicitud de intervención en conflicto docente”, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones se inician a partir de presentaciones de ciudadanos rionegrinos de distintas localidades solicitando intervención de la Defensoría del Pueblo en procura de una solución en el conflicto que mantienen los trabajadores de la educación y el Gobierno provincial.

Que el conflicto lleva 24 días sin resolución, habiendo afectado el inicio mismo del ciclo lectivo con motivo de las medidas de acción directa dispuestas por la organización gremial Un.T.E.R.

Que a la falta de concurrencia de los docentes a las aulas, se suman los cortes de ruta dispuestos por la gremial, medidas por tiempo indeterminado que resultan de público y notorio conocimiento.

Que los principales perjudicados son los alumnos, destinatarios primarios del derecho a la Educación Pública. Las consecuencias del prolongado conflicto afectan a la sociedad rionegrina en su conjunto, no solo por el frustrado inicio del ciclo lectivo y la pérdida de los días de clase, sino también por los trastornos que ocasionan a diario los cortes de ruta en toda la región.

Que las partes se han mantenido firmes en sus posturas.

Que la falta de convocatoria a reunión paritaria dificulta avanzar en el tratamiento de la cuestión salarial y el resto de los temas que componen las reivindicaciones de los trabajadores. Ello no permite destrabar el conflicto.

Que la situación se agrava con el transcurso de los días.

Que resulta lamentable el enfrentamiento de los propios trabajadores entre si. Llama la atención la agresividad puesta de manifiesto por un grupo de choferes de camión en el piquete de Chichinales el pasado sábado 14 de marzo, con un antecedente algo menos violento protagonizado días atrás. Teniendo en cuenta que el sindicato de camioneros mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno Provincial, sería auspicioso que todos los esfuerzos fueran puestos para evitar futuros enfrentamientos.

Que también llama la atención a esta Defensora del Pueblo el accionar tibio de las fuerzas de seguridad a la hora de identificar a los protagonistas de aquellos hechos de violencia.

Que la situación de conflicto se venía anunciando a partir de los reiterados reclamos de los trabajadores, la falta de respuesta, el desinterés e inacción puestos de manifiesto por el Gobierno provincial.

Que ya el año pasado la organización gremial había denunciado un comportamiento unilateral, arbitrario e irregular por parte de los miembros gubernamentales del Consejo Provincial de Educación, circunstancia que motivó la formación del expte. administrativo Nº 985/08 caratulado "Un.T.E.R. s/ denuncia por el accionar del Ministerio de Educación".

Que particularmente se cuestionaba el dictado de las resoluciones Nº 1127/08 y 1586/08, y 2602/08 del cuerpo colegiado, en virtud de las cuales, respectivamente, no se permitía inscribir "fuera de término" a docentes egresados de institutos fuera de la provincia, se establecía la prioridad de cargos a docentes domiciliados en la respectiva localidad, y se autorizaba una inscripción extraordinaria fuera de término en las Juntas de Clasificación a quienes tuvieran título docente.

Que se requirió información científica al Ministerio de Educación respecto de los antecedentes y fundamentos que habían llevado al dictado de tales actos administrativos, más las respuestas fueron poco satisfactorias y evasivas.

Que a este respecto, en el último informe in voce manifesté: "Lo que puede advertirse es la escasa practicidad y confusión que generan las resoluciones de la cartera educativa. No sólo docentes sino también supervisores han cuestionado las resoluciones por considerarlas discriminatorias y arbitrarias...".

Que en el centro del conflicto se ubica el reclamo por aumento salarial y el ámbito natural para su tratamiento y resolución es la Paritaria Docente, resultando alarmante que sea el propio Gobierno quien haya abandonado este ámbito de negociación.

Que la solución del conflicto parece haber quedado supeditada al resultado de las gestiones del Poder Ejecutivo Provincial ante el Gobierno Nacional en procura de obtener fondos o de la incorporación de la provincia de Río Negro al Fondo de Emergencia de la Ley de Financiamiento Educativo. Gestiones anunciadas por la prensa, desarticuladas, con trámite y resultado incierto, libradas a la más absoluta discrecionalidad.

Que por otra parte, en la Comisión de Educación de la Legislatura, legisladores y el gremio docente habrían acordado avanzar en una revisión integral del presupuesto provincial para la readecuación de las partidas que resulten modificables, con un eventual destino a incrementos salariales.

Que las medidas de fuerza adoptadas por la gremial, traducidas en paro, cortes de ruta, escarches, tienen como contrapartida distintas actitudes confrontativas del Gobierno provincial, que nada han contribuido a la superación del conflicto.

Que la pretendida nacionalización del conflicto, la invocada imposibilidad de aumentar los salarios, los dichos desafortunados de funcionarios del Gobierno, incluido el propio Gobernador, la falta de respuesta en el ámbito correspondiente, y los recientes descuentos indiscriminados practicados los trabajadores, aun a aquellos que no han adherido al paro, todos estos actos también constituyen medidas de acción directa por parte de la patronal.

Que lejos de apoyar cualquier medida de acción directa, esta Defensora del Pueblo hace un llamado a la reflexión, instando a las partes al diálogo y al entendimiento a través de las herramientas legales disponibles, priorizando el fin superior cual es el mantenimiento de la paz social.

Que la movilización del día viernes 13 de marzo fue muestra del creciente descontento popular, resultando preocupante que el asueto administrativo dispuesto en la ciudad de Viedma haya significado la falta de autoridades en todos los organismos públicos provinciales.

Que el artículo 60 de la Constitución Provincial establece que la educación es un derecho esencial de los habitantes y una obligación irrenunciable del Estado.

Que el conflicto ha discurrido fuera del marco legal establecido, lo cual denota falta de voluntad e incapacidad de generar el diálogo en la búsqueda de soluciones superadoras.

Que es responsabilidad del Primer Mandatario el cumplimiento de los postulados de la Constitución Provincial y las leyes, correspondiendo en consecuencia que asuma el protagonismo que por Derecho demandan los rionegrinos, consolidando los espacios legales de diálogo que tiene a disposición, haciendo un ejercicio real y efectivo de la autoridad que inviste.

Que la situación de conflicto debe cesar de inmediato, resultando imprescindible un accionar certero y eficaz por parte del Poder Ejecutivo Provincial que garantice el derecho a la educación de todos los rionegrinos, el orden público y la paz social.

Que la situación descripta hace procedente formular una recomendación al Sr. Gobernador de la provincia de Río Negro.

Por ello,

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

ARTICULO 1º: RECOMENDAR al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Dr. Miguel Angel Saiz, se sirva arbitrar con carácter de urgente las medidas idóneas y conducentes tendientes a encausar el conflicto docente dentro de los carriles constitucionales y legales, evitando de esta forma las consecuencias lamentables e impredecibles que la profundización del conflicto pueda ocasionar.

ARTICULO 2º: Instar a las partes en conflicto al diálogo y al entendimiento, sobre la base de los cuales será posible el cese de las medidas de acción directa dispuestas por la gremial y por la patronal.

ARTICULO 3º: A los efectos indicados en los artículos que anteceden, notifíquese con copia de la presente al Sr. Gobernador de la Provincia y al Secretario General del gremio Un.T.E.R.

ARTICULO 4º: Poner en conocimiento de la presente al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial y al Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro.

ARTICULO 5º: Regístrese, notifíquese, cumplido, archívese.-

3 - RESOLUCIÓN Nº 46/09 “DPRN”

VIEDMA, 13 de abril de 2009

VISTO los Expedientes Nº 9319/06, 0079/07 y las Actuaciones Nros. 0228/07, 0757/07, 0761/07, 0898/07, 77/08 y 201/08, del registro de esta Defensoría del Pueblo, referidas a reclamos relacionados con Areas del Ministerio de Salud Pública, y

CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones se agregan reclamos presentados por vecinos de distintas localidades de la Provincia, en el cual plantean sus quejas dentro de la órbita de actuación de esta Institución, a partir de lo cual se decide la avocación al caso, conforme las atribuciones legalmente conferidas.-

Que en el marco de las mencionadas actuaciones y evaluada cada una de ellas, se ha solicitado informe a las Areas correspondiente sobre la situación planteada en cada caso, a los efectos de permitir a esta Defensoría del Pueblo comprender las causas que motivaron cada uno de los reclamos.-

Que ante el silencio de las mismas, se efectuaron reiteraciones, de las cuales se agregan constancias en las actuaciones, y a la fecha no se ha dado una respuesta formal.-

Que todo ello hace necesario considerar al organismo involucrado incurso en la falta de colaboración prevista especialmente para las personas jurídicas de carácter público que le impone la ley 2756.-

Que, cabe considerar agotadas las gestiones y dar por concluido el trámite de las mismas.-

Por ello,

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE
LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

ARTICULO 1º: Tener por incumplido el deber de colaboración e información a esta Defensoría del Pueblo por parte de cada uno de los Organismos involucrados en los Expedientes y Actuaciones de referencia.--

ARTICULO 2º: Poner en conocimiento de la circunstancia descripta a la Sra. Ministra de Salud de la Provincia, Dr. Cristina Liliana Uria, en su carácter de Superior Jerárquico, a los efectos de que en lo sucesivo se revierta la actitud remisa de las Areas a su cargo, solicitándole se sirva informar de las medidas a adoptar en cada caso.-

ARTICULO 3º: Regístrese, Comuníquese, Cumplido, Archívese.-

4 - RESOLUCIÓN Nº 48/09 “DPRN”

Viedma, 14 de mayo de 2009

VISTO: La actuación número 504/09 “DPRN” caratulada: “Defensora del Pueblo de Río Negro s/ Decreto 80/09”, y

CONSIDERANDO

Que por medio del Decreto 66/09 el Gobernador de la Provincia dispuso un plan de reducción de gastos en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Entre las medidas adoptadas se resolvió suspender nuevas contrataciones de personal, restricciones de viáticos, horas extraordinarias, y limitaciones en telefonía celular, entre otras.

Que en esa misma línea con fecha 24 de marzo del corriente año, el Titular del Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto 80/09, por medio del cual se establece a partir del 01 de abril de 2009 que el haber máximo a abonar en el ámbito del “... Poder Ejecutivo Provincial y Sociedades del Estado Provincial...” no puede superar el del cargo del Gobernador. (art. 1 decreto citado).

Que la norma considera haber a la remuneración bruta mensual y habitual, excluidas las asignaciones familiares y adicionales por horas, gastos y estímulos.

Que sin perjuicio de las consideraciones que siguen a continuación, adelanto mi opinión, afirmando que el decreto en cuestión es infundado, arbitrario, confuso, contradictorio, y desprolijo, tornándose de esta manera inconstitucional.

Que es infundado al no acreditar los requisitos fundamentales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para este tipo de medidas.

Que no se acredita “un desequilibrio financiero”, solo se trata de una afirmación dogmática.

Que los actos administrativos para ser válidos deben encontrarse motivados, la falta de motivo, o sustento lo torna susceptible de ataque por invalidez.

Que entre los considerandos del decreto en cuestión se alude a las facultades otorgadas por el artículo 181 inc. 1 de la Carta Magna Provincial.

Que esta norma determina que el Gobernador es el jefe de la administración pública provincial y el ejecutor de las leyes.

Que de dicho norma suprallegal, no surge la autorización para reducir haberes de empleados y agentes de la administración pública.

Que para ello debió utilizarse el mecanismo determinado en el inciso 6 del artículo 181 de la Carta Provincial, es decir la vía de los decretos conocidos como de “necesidad y urgencia”.

Que debió haberse dictado en acuerdo de Ministros, remitiéndose a la Legislatura en el plazo allí previsto, circunstancias totalmente ausentes aquí.

Que la Corte Suprema de Justicia Nacional le ha puesto límite a la discrecionalidad (potestad estatal) de alterar normativamente los márgenes de la retribución, por razones de emergencia.

“(…) Tal situación es particularmente grave si se advierte que los derechos de los habitantes se encontrarían a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar su política económica, gestando un desajuste que podría fácilmente conjurar con la disposición de los salarios de los trabajadores estatales, con grave afectación del derecho de propiedad y de las normas que protegen la relación laboral.”

Que la doctrina especializada tiene dicho que la potestad estatal de alterar normativamente los márgenes de la retribución por razones de emergencia encuentra dos limitaciones esenciales:

- debe ejercerse con carácter temporal;
- no debe alterar la sustancia de la contratación.

Que entonces tenemos que la potestad debe plasmar una medida de carácter temporal, y no debe alterar la sustancia de la contratación. En relación al primero, ha señalado la inconstitucionalidad de estas normas, si carecen de plazo.

Pero aún previendo el plazo, y no siendo confiscatoria, el Estado jamás puede alterar la sustancia del contrato con el agente. No se puede desvirtuar la relación de empleo público. Ni en su significación económica, ni jerárquica o escalafonaria.

Que al observar algunos recibos de sueldos correspondientes al mes de abril, en algunos casos, se ha aplicado una reducción confiscatoria de haberes, alterando la sustancia de la contratación.

Que de esta manera aparece la arbitrariedad de la norma.

Que la contradicción se advierte a todas luces pues hace apenas 15 días el Poder Ejecutivo otorgó a toda la Administración Pública un aumento salarial general.

Que se invoca en el decreto, una “situación financiera internacional” que supone conocida, la cual sabemos preexistente al último aumento salarial. Es decir se constituye un vacío contradictorio del decreto, pues se habla de desequilibrio financiero, repito, sin acreditar, que autorizó un aumento salarial general y en poco días una reducción de haberes.

Que es preciso efectuar algunas reflexiones en referencia a las características que denotan al concepto jurídico de “salario”.

Que la doctrina laboralista afirma que el sueldo goza de la protección brindada por el principio de irrenunciabilidad, de modo tal que el contrato de trabajo no puede ser alterado, restringido o suprimido en perjuicio del trabajador.

Que también lo ampara la garantía de intangibilidad, en la medida en que resulta nula su reducción por debajo de los mínimos garantizados por el orden público laboral (derechos reconocidos por las normas que integran el bloque de legalidad laboral).

Que al Corte Suprema de la Nación ha dicho que: “.. a fin de considerar que se ha violado el principio de irrenunciabilidad e intangibilidad de la remuneración, debe existir el perjuicio concreto consistente en una rebaja de la retribución, una modificación que importe una alteración irrazonable en su composición o la desjerarquización respecto del nivel alcanzado por el trabajador.” (Fallos 314:253, en autos: “Felauto, Miguel Ángel c/ Mercedes Benz Argentina SA del 09/04/1991).

Que también el salario se caracteriza por el contenido alimentario. Con prescindencia de su volumen, “es concebido como el ingreso que posibilita el sustento material del trabajador y su familia. En función de ello, ha sido objeto de una extensa regulación protectora a fin de resguardar su percepción íntegra y oportuna, eliminando el menoscabo que puede derivar de la inexistencia de límites para su afectación.” (Conf. Marcelo Navarro – Revista de Derecho Laboral).

Que es el carácter alimentario precisamente el que según la Corte y la doctrina imperante, permite la similitud entre la contratación laboral privada y la pública.

Que en definitiva el máximo Tribunal del país, ha dicho que los salarios tienen un rasgo distintivo común, cual es la naturaleza alimentaria de las prestaciones. Lo que determina la necesidad de una eficaz protección legal, y de ser necesario, jurisdiccional.

Que los caracteres de irrenunciabilidad, intangibilidad y alimentario protegen la estructura del salario, limitando las reducciones arbitrarias y confiscatorias.

Que en igual sentido se ha pronunciado nuestro máximo órgano jurisdiccional. Así se ha expresado que: “La incidencia que la aplicación de la ley 3058 tuvo en la remuneración del accionante, consistente en una disminución superior al 40 (cuarenta por ciento), conforme lo tuvo por acreditado el “a quo” importa una disminución de magnitud en el sueldo del actor. Siendo esa la dimensión, puede afirmarse que constituye una afectación “sustancial” en los términos de la “doctrina legal” de este Superior Tribunal. Dicho porcentual supera ampliamente los porcentajes señalados en distintas ocasiones por la Corte Suprema para delimitar los supuestos de confiscatoriedad. Por ello la aplicación de la ley 3058 en el caso aquí debatido se halla en franca pugna con los preceptos constitucionales que amparan el derecho de propiedad del actor (art. 29 Const. Prov. y arts. 14 y 17 de la Const. Nac.), y limitan las facultades del poder estatal, los que -como es obvio- deben prevalecer. (Voto del Dr. Lutz).” (en autos “G. D. E. c/ Provincia de Río Negro s/ contencioso administrativo s/ inaplicabilidad de ley”, STJ de fecha 03/05/2000).

“... Toda disminución aceptable del monto del sueldo, debe tener alcance general y no particular para determinados agentes. De lo contrario vulneraríase el principio de igualdad proclamado por la Constitución Nacional.” (fallo citado).

Que asimismo en autos “H. A. y OTROS c/ Provincia de Río Negro (IPROSS). s/ contencioso administrativo s/ inaplicabilidad de ley STJ sentencia del 01/11/2001) y otros, se expresó que: “... en el criterio de este Superior Tribunal de Justicia en el “sub exámine” resultan de plena aplicación los criterios que signaron el pronunciamiento de la Corte Suprema al que se viene haciendo referencia (GUIDA del 02-06-00). pues - como se verá- la solución del caso no puede ser sustancialmente distinta en virtud de configurarse múltiples circunstancias analógicas, y -por si ello fuera poco- en mérito a la concurrencia de otros ingredientes que seguidamente se pondrán de resalto. Si bien los montos se refieren a personal jerárquico lo cierto es que sus fundamentos no se diferencian, porque como ya expresamos la crisis económico financiera se ha profundizado (1995/2001). ; y el importante impacto salarial en el presupuesto real (sin dudas) sigue siendo el más relevante. Amén de los controles genéricos de orden formal que en este caso se verifican (vgr. órgano del que proviene la norma, etc.). el control de constitucionalidad, en esta materia vinculada a derechos de orden patrimonial, o de

propiedad, pasa primera y fundamentalmente por los “standars” que utiliza la Corte; empero no necesariamente se agota allí. Tales “standars” son “... el “principio de razonabilidad” que emerge del art. 28 de la Constitución Nacional; la no confiscatoriedad que resulta de una interpretación amplia del art. 17, en cuanto extiende la prohibición de confiscación que allí está indicada para nuestro Código Penal a temas no penales, a cualquier decisión estatal; y finalmente, la interpretación de que no se pueden afectar derechos adquiridos; es decir, aquellos incorporados al patrimonio.” (Voto de los Dres. Balladini y Sodero Nievas).

Que del texto del decreto se desprenden otras consideraciones:

- El Artículo Segundo excluye de la reducción a los sueldos del personal policial. No se advierte motivo alguno para efectuar semejante discriminación entre agentes o empleados del estado.
- El Artículo Primero excluye a los adicionales por carga horaria, estímulo, y compensación de gastos, del cómputo para determinar el haber sujeto a reducción, sin contemplar los adicionales por antigüedad, entre otros. Se advierte que el principal colectivo afectado son los docentes de carrera con un importante número de años de servicios.

Que finalmente advierto que el fundamento dogmático invocado es la reducción del gasto, sin considerar que la forma, contenido y circunstancias del decreto será pasible de innumerables juicios contra la provincia, conllevando en el probable caso de resultar desfavorables para el Estado, una erogación ostensiblemente mayor, en atención a las costas judiciales.

Que ante la ausencia de temporalidad en el Decreto, la perpetración de confiscatoriedad en los descuentos y en consecuencia, la alteración de la esencia del contrato de empleo público, se impone al Poder Ejecutivo, la necesidad de efectuar una recomendación tendiente a la reconsideración de la medida plasmada en el Decreto.

**POR ELLO,
LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

ARTÍCULO 1: RECOMENDAR al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Dr. Miguel Ángel SAIZ que reconsidere la medida, disponiendo la derogación por contrario imperio del decreto N° 80/09, o su anulación; en razón de las consideraciones expuestas.

ARTICULO 2º: Poner en conocimiento de la presente al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial y al Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

ARTICULO 3º: Regístrese, Cumplido, Archívese.-

5 - RESOLUCIÓN N° 49/09 “DPRN”

Viedma, 15 de mayo de 2.009.-

VISTO: La actuación número 157/08 “DPRN” caratulada: “Jubilados de Río Negro s/ solicitud de pago de seguro de IAPS”, y sus anexadas A. 502/08 “DPRN”, G. 242/08 “DPRN”, G. 294/08 “DPRN”, G. 358/08 “DPRN” y G. 086/09 “DPRN”, y

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 y siguientes de la actuaciones citadas se presentan ciudadanos rionegrinos solicitando el pago del seguro de vida para mayores de ochenta años.

Que la ley provincial Nº L 4232 sancionada el 4 de octubre de 2007 incorpora modificaciones al Sistema Previsional Solidario y Obligatorio de Vida e Incapacidad a cargo del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Río Negro -I.A.P.S..

Que el artículo 56 dispone expresamente que: “Los afiliados con beneficios jubilatorios que tengan 80 años o más de edad, podrán optar entre permanecer en el sistema o percibir un beneficio cuyo procedimiento de pago e importe se determinará por vía reglamentaria.”

Que los reclamantes han solicitado al Instituto el pago del seguro establecido, habiéndoseles respondido que la mencionada norma aún no había sido reglamentada.

Que ante la falta de implementación del pago referido, con fecha 14 de marzo de 2008 se solicitaron informes a la Secretaría Legal y Técnica de la Secretaría General de la Gobernación, reiterados con fecha 20 de mayo y 15 de agosto de 2008.

Que a fs. 08 la funcionaria requerida respondió que se había remitido al I.A.P.S. el 3 de diciembre de 2007, copia de la ley para el estudio de su reglamentación. Asimismo se remitió copia de la respuesta del I.A.P.S. informando que se encontraba en evaluación técnica de auditores externos.

Que en oportunidad de elevar a la Legislatura Provincial el XIII Informe Anual correspondiente al período 2007-2008 expresaba en relación al presente caso que: “...la innovadora norma contiene un valioso elemento social, y que si bien es comprensible que su implementación requiera de un estudio técnico, también es cierto que el artículo en cuestión involucra derechos para adultos mayores (80 años de edad), quienes por razones biológicas y sociales pretenden una mayor premura en la reglamentación.”

“Debe considerarse que los beneficiarios tienen una gran expectativa en que la norma se implemente, para poder disponer de la indemnización que les corresponde en vida, dado lo avanzado de su edad.”

Que ante los constantes pedidos de los ciudadanos, se remitieron solicitudes de agilización a la Secretaría Legal y Técnica y al Directorio del I.A.P.S.

Que el I.A.P.S. responde con fecha 08 de octubre de 2008 que el Expte. Nº 48.529 donde se tramita la reglamentación del art. 56 se encuentra en la Fiscalía de Estado para que el organismo de control tome la debida intervención.

Que se advierte una considerable mora de la administración en dictar la reglamentación necesaria para asegurar el pleno ejercicio operativo del derecho a percibir el seguro con 80 años de edad.

Que nuestro sistema constitucional, pone en cabeza del órgano legislativo la facultad de sancionar normas jurídicas, que configuran el derecho positivo vigente.

Que asimismo se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar leyes con el objeto de precisar técnicamente los alcances de las leyes.

Que este proceso garantiza la división de poderes, o de funciones (de acuerdo a la doctrina constitucionalista moderna), que hacen a una república democrática.

Que la demora en reglamentar, afecta este juego de poderes, al convertir en letra fría a la norma jurídica.

Que no sólo se trastoca la división de funciones republicanas, sino que se vulneran los derechos reconocidos o regulados en la norma incompleta.

Que en un reciente proyecto de ley ingresado al Congreso de la Nación, se propone incorporar al derecho vigente la acción por omisión reglamentaria. Entre los fundamentos del mismo se menciona:

“Entre los antecedentes nacionales cabe destacar el artículo 207 de la Constitución de Río Negro establece que el “Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones: ...

“En las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado Provincial o a los municipios, la demanda puede ser ejercida -exenta de cargos fiscales- por quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo”.

El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que se subsane la omisión. En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso con efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable que se acredite.”

Que no es intención de esta Defensora del Pueblo, que la omisión de reglamentación deba subsanarse por la vía jurisdiccional.

Que apelando a un ejercicio correcto de las facultades administrativas del Sr. Gobernador, se torna necesario efectuar una recomendación solicitando la pronta reglamentación y ejecución del artículo 56 de la ley L 4232.

**POR ELLO,
LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

ARTÍCULO 1: RECOMENDAR al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Dr. Miguel Ángel SAIZ a que disponga la inmediata reglamentación y ejecución del artículo 56 de la ley L 4232; en razón de las consideraciones expuestas.

ARTICULO 2º: Poner en conocimiento de la presente al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial y al Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

ARTICULO 3º: Regístrese, Cumplido, Archívese.-

6 - RESOLUCIÓN Nº 54/09 “DPRN”

VIEDMA, 01 de octubre de 2009

VISTO: El expte. Nº 641/08 “DPRN” caratulado “LUNA, Silvia s/ denuncia por acoso moral y laboral”, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones se inician a partir de una presentación de la Directora del CEM Nº 60 de Gral. Conesa, a través de la cual se denuncia una serie de conductas que podrían configurar acoso laboral por parte de autoridades y demás miembros de la comunidad educativa.

Que ello sería consecuencia de las distintas irregularidades denunciadas por la promotora de las actuaciones respecto de la situación administrativa y patrimonial del establecimiento, circunstancias debidamente informadas a sus superiores jerárquicos (Supervisión Zonal y Dirección de Nivel Medio), habiéndose inclusive sustanciado una investigación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (Expte. Nº 87/07).

Que particularmente se ha cuestionado el manejo que ha hecho la Cooperadora Escolar de los fondos girados desde el Ministerio de Educación, correspondiendo destacar que en el mismo edificio funcionan tres (3) establecimientos educativos en diferentes turnos.

Que la promotora ha desarrollado incesantes gestiones ante el Ministerio tendientes a la normalización paulatina de las irregularidades denunciadas, todo lo cual se encuentra debidamente acreditado en las actuaciones de referencia.

Que con fecha 15 de Setiembre de 2008 se dictó la Resolución Nº 125/08 "DPRN" a través de la cual se advertía la gravedad de la situación y la necesidad de arbitrar las medidas conducentes, para lo cual se formuló una Recomendación al Sr. Ministro de Educación.

Que a pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio tan sólo se limitó a responder que a la brevedad se implementarían instancias de mediación en el citado establecimiento, tendientes a superar los inconvenientes de la comunidad educativa (fs. 70).

Que la situación pareciera haberse agravado a partir de la intervención de éste Organismo de control, particularmente por el inicio de un Sumario Pedagógico dispuesto por Resol 188/08 JDD (CPE) de fecha 25-11-08, cuya copia obra a fs. 262-4.

Que la promotora de las actuaciones ha incorporado nueva documentación al expediente, obrando inclusive copia de una Resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de fecha 9-12-08 (fs. 131-6) y del respectivo informe de Auditoría (137-143), a través de la cual se comunicaba al Sr. Ministro de Educación que en el plazo de 60 días debía informar sobre las medidas a adoptar para la regularización de la situación patrimonial de la escuela.

Que a fs. 146 obra nueva presentación de la señora Silvia Luna dando cuenta, entre otras cuestiones, que por Resol. 151/09 había dejado de ser Directora de la Escuela Agrotecnica.

Con fecha 20 de marzo de 2009, se cursa nueva nota a la cartera educativa, esta vez formulando un cuestionario con 12 preguntas respecto de la situación cada vez más grave y de las medidas dispuestas (fs. 251-2).

Que con fecha 24-04-09, y ante la falta de respuesta se cursa una nueva nota al Señor Ministro solicitando su intervención en forma directa "en salvaguarda del patrimonio provincial y a los efectos de deslindar las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder" (fs. 256).

Con fecha 28 de abril responde muy escuetamente la Subsecretaria de Educación (prof. Norma Nakandakare) el cuestionario oportunamente formulado, aunque sin brindar demasiadas precisiones y con expresiones que realmente asombran, por ejemplo cuando sostiene que "...Este Ministerio no tenía conocimiento que la misma tuviera habilitación de SENASA Por otro lado desconocía que la Sra. Luna realizara denuncia alguna por acoso moral y laboral".

Que con respecto a la habilitación de SENASA, la misma había sido establecida por resolución P87/07 que expresamente aclara que la habilitación pudo obtenerse merced

a la nota nº 411/06 del 23 de agosto de 2006, suscripta por la entonces Vicedirectora profesora Norma Verrechia.

Que al referirse a los sumarios administrativos pedagógicos se refiere a una “aparente mala administración de la cooperadora” como una cuestión menor y no como el origen principal de los problemas de la escuela agraria, omitiendo mencionar que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas había destacado en su resolución que el estado de realidad del CEM 60 era consecuencia directa del accionar de la cooperadora Dafne Cadenaso.

Que con dicha respuesta acompaña además copia de tres resoluciones (sumarios), manifestando que el desempeño de la Directora, corresponde sea evaluado por el señor Supervisor adjuntado a tal efecto un informe totalmente desfavorable a la señora Directora, aunque las planillas de calificación de concepto profesional certifican su calificación general como “MUY BUENA” (en letras y en números), evidenciando una contradicción manifiesta, inaceptable por cierto (fs. 257 y sigs.).

Que por otra parte, a fs. 284 obra una respuesta del Director General de Asuntos Legales (Min. Educ) informando que por Disposición Nº 21/09 se ha designado transitoriamente a la Sra. Directora Silvia Luna como responsable interina de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, acompañando copia de la misma e informando que no se ha dado cumplimiento con la realización del “inventario pormenorizado de los bienes con los que cuenta el CET Nº 4”.

Que a fs. 287 obra copia de una “autorización provisoria” del Vocal Gubernamental del CPE de dos divisiones y un cargo de preceptor en el establecimiento educativo, circunstancia que ha generado el rechazo de toda la comunidad educativa (fs. 288-291).

Que la intervención de la Defensoría del Pueblo ha perseguido en una primera instancia colaborar en la situación de persecución laboral que padece la reclamante, sin perjuicio de haber advertido con el desarrollo de las actuaciones la necesidad primordial de velar por la integridad del patrimonio del Estado.

Que la respuesta institucional del Ministerio de Educación ha sido al menos poco satisfactoria, toda vez que los planteos formulados por la promotora de las actuaciones tuvieron mayor efecto en la sustanciación de un sumario administrativo pedagógico en su contra, que en la propia resolución de las irregularidades denunciadas.

Que más allá de la conclusión que antecede, el trámite del expediente ha permitido incorporar valiosa prueba testimonial y documental, 26 fotografías, grabaciones de entrevistas periodísticas, particularmente una realizada a un grupo de padres en un programa televisivo que se emite por cable, y otras seis entrevistas a distintos miembros de la comunidad, de todo lo cual obran los respectivos videos, como así también declaraciones testimoniales tomadas por personal de la defensoría del Pueblo, según consta en actas respectivas de fs. 299-305 del expte.

Que con fecha 02 de Setiembre de 2009 la Directora del CET Nº 4, Sra. Silvia Luna, recibe del SENASA el listado de los animales que obran como pertenecientes a la escuela y a la cooperadora (caravanas), resultando sorprendente su desproporción. En la misma fecha la Cooperadora Dafne Cadenaso remitía carta documento a la misma Directora solicitando se abstenga de “afectar nuestro derecho de propiedad, no innovando sobre la titularidad del ganado”, a la vez que desconociendo toda virtualidad jurídica a la Disposición Nº 21/09 de la Dirección de Nivel Medio del Ministerio de Educación. Constancias cuyas copias también obran en el expediente.

Que a esta altura de las circunstancias, habiendo ya formulado las recomendaciones oportunas al Ministerio de Educación y obtenido algún principio de solución en cuanto a

la situación personal de la denunciante y visualizando alguna corrección de las irregularidades constatadas, es que corresponde en principio considerar agotada la intervención de esta Defensoría del Pueblo.

Que sin embargo, habiendo recolectado suficiente información así como distintos elementos de prueba que podrían merituar una investigación más profunda de la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados, se estima procedente poner todos los elementos a disposición del Sr. Fiscal de Investigaciones Administrativas con remisión de copia íntegra del expediente, a los fines pertinentes.

Que a tal efecto, una oportuna evaluación de las pruebas colectadas en la investigación de la Defensoría del Pueblo, permitirá establecer si las irregularidades administrativas comprobadas marítan profundizar investigación por parte de esa Fiscalía de Investigaciones Administrativas a los efectos de deslindar responsabilidades, así como la promoción de las acciones penales que pudieran corresponder.

Que, por lo demás, resta confiar en la justa y pronta resolución de los sumarios administrativos en trámite por parte de la cartera educativa, entendiendo que la actuación de este Organismo de Contralor ha contribuido al inicio del proceso regularización administrativo-patrimonial del establecimiento educativo, y a la normalización de las relaciones humanas.

Por ello:

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

ARTICULO 1º.- Poner a disposición del Sr. Fiscal de Investigaciones Administrativas, todos los elementos recolectados en la investigación del expediente administrativo N° 641/08 "DPRN", con remisión de copia íntegra del mismo y de la presente Resolución, a los efectos previstos en los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2º.- Notificar de la presente al Sr. Ministro de Educación, a los efectos correspondientes.

ARTICULO 3º.- Mantener las actuaciones en Reserva, en espera de la resolución de los sumarios administrativos en trámite por ante la Cartera Educativa.

ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese, oportunamente archívese.

7 - RESOLUCIÓN N° 55/09 "DPRN"

VIEDMA, 16 DE OCTUBRE DE 2009

VISTO: El expte. administrativo N° 9573/06 y las actuaciones iniciadas a partir de la Gestión N° 169.09 "DPRN", y

CONSIDERANDO:

Que se inician actuaciones a partir de reclamos de los trabajadores de la Delegación de Promoción Familiar de la ciudad de Gral. Roca, quienes denuncian una situación de precariedad laboral extrema así como abusos de autoridad reiterados por parte del Delegado local Néstor Epulef y la Coordinadora Técnica, Patricia Sánchez.

Que en el mes de Mayo del corriente año los trabajadores iniciaron una ocupación pacífica de la Delegación de Promoción Familiar de Gral. Roca en demanda del cese de las persecuciones y mejora de las condiciones laborales, contractuales y salariales, exigiendo además la renuncia de los funcionarios cuestionados, circunstancia que resulta de público y notorio conocimiento.

Que según trascendió en distintos medios de prensa, la Sra. Subsecretaria de Promoción Familiar, Sra. María Teresa Seghezzo de Spina, habría ratificado la decisión de mantener a los funcionarios políticos cuestionados, sin que ello excluyera la posibilidad de reanudación del diálogo para llegar a soluciones consensuadas. Habría manifestado asimismo que las situaciones denunciadas no habían sido comunicadas en forma previa a las autoridades del área.

Que durante el desarrollo del conflicto se sucedieron una serie de hechos desafortunados que no contribuyeron a acercar las distanciadas posturas de las partes.

Que ante la falta de concurrencia de funcionarios provinciales a un encuentro previsto con los trabajadores para el día 1º de Junio, desde el Gremio ATE se dispuso ratificar el plan de lucha y convocar al Sr. Ministro de Familia a un encuentro con miras a destrabar el conflicto.

Que más allá de manifestar su permanente disposición al diálogo, la Subsecretaria de Promoción Familiar, luego de 17 días de ocupación del edificio, comunicaba la decisión de mantener en sus puestos a los funcionarios cuya renuncia se demandaba.

Que el día 1º de Junio el Delegado de la Secretaría de Trabajo Provincial habría concurrido a la Delegación de Promoción Familiar proponiendo una instancia de mediación, la cual no pudo concretarse.

Que los hechos se agravaron el día 03 de Junio cuando autoridades del Ministerio intentaron retirar material de trabajo de la Delegación y los trabajadores que ocupan el lugar no lo habrían permitido. Por lo que al día siguiente, con la compañía de efectivos policiales y por decisión del juzgado interviniente, el Delegado habría procedido al retiro de equipamientos y archivos de la Delegación.

Que luego de 36 días de ocupación y protesta, el Obispado del Alto Valle intercedió en procura de una mediación, reuniéndose los trabajadores de Promoción Familiar con el Ministro de Familia en la sede del Obispado de General Roca. Ambas partes plantearon una serie de condiciones, no resultando posible en un primer momento arribar a un acuerdo superador.

Que luego de 51 días de conflicto, los trabajadores más allá de demandar el cese de los contratos irregulares y mal remunerados, la renuncia de los funcionarios y otras reivindicaciones, comenzaron a visualizar la necesidad de evitar las consecuencias indeseadas que podrían derivar de medidas disciplinarias por parte del Ministerio.

Que transcurridos 64 días de ocupación de la Delegación de Promoción Familiar de la ciudad de Gral. Roca, merced a la mediación del Obispado del Alto Valle a través del Vicario General, finalmente pudo arribarse a un acuerdo, el que quedó plasmado en el Acta Acuerdo de fecha 20 de Julio de 2009, suscripta en la oportunidad por los representantes de los trabajadores del Gremio ATE, por la Subsecretaria de Promoción Familiar (no por el Ministro de Familia) y por el Presbítero Jorge Fernández Pazos.

Que dicho acuerdo consignaba, entre las medidas y acciones más destacadas para superar el conflicto:

- Que no se iban a realizar sumarios administrativos, despidos ni descuentos por los días de permanencia pacífica en la Delegación, como así tampoco traslados a otros Programas u otro tipo de represalias.
- El compromiso del Ministerio de Familia a realizar las contrataciones de Becas a Decreto 115/05 en un plazo de dos meses, de unos ochenta (80) trabajadores del área Promoción Familiar en la provincia de Río Negro,
- Una reunión prevista para el 5 de Agosto con el fin de abordar la modalidad en la liquidación de los descuentos realizados por los días de paro,
- El compromiso del Ministerio para fines del mes de Agosto, de convocar al Ministerio de Hacienda, al Consejo de la Función Pública y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para retomar la discusión de pase a planta y la situación contractual de trabajadores con Decreto N° 115/05,
- El abono retroactivo a los trabajadores bajo la modalidad de Becas que no hayan percibido el aumento de \$ 200 para el mes de Junio, aumento que para los profesionales sería a partir del mes de Julio de 2009,
- El cese de la ocupación de la Delegación por parte de los trabajadores, entregando el lugar en perfectas condiciones,

Que los trabajadores dejaron constancia de su desacuerdo por la continuidad en los cargos del Delegado Nestor Epulef y la Coordinadora Técnica Patricia Sánchez.

Que el día 28 de Septiembre del corriente año se toma conocimiento de un Comunicado de Prensa a través del cual los trabajadores denuncian el incumplimiento de los compromisos asumidos por parte del Ministerio de Familia en acta acuerdo celebrada el día 20 de Julio pasado, y que diera aparente solución al conflicto.

Que en idéntico sentido, con fecha 05 de Octubre unos veinte (20) trabajadores de Promoción Familiar de Gral. Roca remiten una nota a la Defensora del Pueblo, manifestando que desde el año 2005 vienen denunciando la situación de precariedad laboral que lleva adelante el Ministerio de Familia para con los trabajadores;

Que en su misiva relatan la cronología de los hechos que los habría llevado a la determinación de ocupar pacíficamente la Delegación de Promoción en el mes de Mayo, culminada luego de 64 días a partir de la firma del acta acuerdo del 20 de Julio.

Que según manifiestan, ninguno de los puntos acordados y comprometidos por el Ministerio de Familia se habrían cumplido, continuando los trabajadores siendo sometidos a hostigamiento e intimidaciones por parte de las autoridades locales y provinciales;

Que se habrían aplicado sumarios administrativos a once trabajadores, privándolos del acceso al expediente con invocación de un pretendido secreto de sumario que les negaría la posibilidad de arbitrar estrategias legales de defensa;

Que denuncian asimismo la aplicación de descuentos basados en el supuesto incumplimiento de tareas durante los días de protesta, descuentos que serían producto de la alteración y falseamiento de las planillas de asistencia por parte de funcionarios locales, dejando constancia que la ocupación pacífica de la Delegación no implicó el cese de las actividades normales y habituales.

Que la situación descripta no resulta extraña para la Defensoría del Pueblo, ya que similares planteos habían sido denunciados por los trabajadores en el mes de diciembre

de 2006, labrándose un expediente que giró bajo el Numero 9573/06 “DPRN” caratulado “Personal de Promoción Familiar (Gral. Roca) s/denuncian situación laboral”.

Que en dicho expediente se dictó la Resolución Nº 175/07 “DPRN”, a través de la cual se dispuso cursar al Sr. Ministro de Familia el correspondiente pedido de informe acerca de la situación denunciada, sin perjuicio de la necesaria intervención en el conflicto de la Secretaría de Trabajo Provincial. La información solicitada nunca tuvo respuesta por parte del Ministerio.

Que la situación de precariedad laboral imperante en la Delegación de Promoción Familiar de Gral. Roca, que no difiere demasiado de otras dependencias de la Administración Pública, impacta en forma directa en perjuicio de la población asistida destinataria de los distintos programas a cargo del área. Correspondiendo destacar que la tarea de contención que desarrollan los trabajadores de Promoción Familiar está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social.

Que el contacto directo con niños, niñas y adolescentes en situación de abandono o conflicto con la ley, indigencia y otras carencias, además de una adecuada articulación de los distintos programas y tareas, requiere la atención del bienestar y la salud física y psíquica de los propios trabajadores, muchas veces expuestos a situaciones de riesgo. Y ello también integra las políticas sociales del Estado provincial, y debería resultar prioritario.

Que a tenor de lo expuesto, los trabajadores solicitan la intervención de la Defensora del Pueblo en el marco de sus atribuciones;

Por ello:

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESUELVE:**

Artículo 1º.- RECOMENDAR al Sr. Ministro de Familia, Dn. Alfredo Pega que intervenga en forma personal ante la situación de conflicto que mantiene la Cartera a su cargo con los trabajadores de Promoción Familiar de General Roca.

Artículo 2º.- RECOMENDAR particularmente al Sr. Ministro de Familia arbitre las medidas idóneas tendientes a garantizar el cumplimiento irrestricto del acta acuerdo de fecha 20/07/09, que posibilitó destrabar el conflicto luego de 64 días con medidas de acción directa.

Artículo 3º.- A tal efecto se sugiere instruir a los funcionarios del Ministerio de Familia, locales y provinciales, según corresponda, para la ejecución de medidas concretas que posibiliten el cese inmediato de la situación de precariedad laboral extrema que padecen los trabajadores, dado el impacto social que conlleva.

Artículo 4º.- Regístrese, Comuníquese, oportunamente archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 55/09 “DPRN”.-